



CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL

EXPEDIENTE: 004/2022

D. Fernando García de la Torre, Jefe de Servicio de Contratación, como Secretario de la Mesa de Contratación de esta Consejería, respecto al contrato de servicios denominado: **PROGRAMA DE RESPIRO PARA FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y GRAVES TRASTORNOS DE CONDUCTA**

CERTIFICO:

Que la Mesa de Contratación, en su reunión del día 12 de enero de 2022, ha acordado excluir de la licitación a la entidad **FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI**, por lo siguientes motivos:

No justificar suficientemente el cumplimiento de los criterios de solvencia técnica o profesional, en concreto:

Con relación al certificado emitido por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad que aportó la Fundación Juan XXIII para la Mesa de Contratación Tercera celebrada el 21.12.2021, que relaciona el volumen de los servicios facturados a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social por las plazas contratadas por dos centros de atención diurnos y que tienen relación con el contenido de este contrato de licitación, la fundación aporta como respuesta al requerimiento recibido dos relaciones para acreditar la solvencia técnica alegando que más de 70 familias de usuarios de estos centros son participantes también del servicio de convivencia familiar y social (SERVICIO CONVIVE).

Las relaciones aportadas son:

Documento número 2, certificado de discapacidad de los participantes del servicio CONVIVE.

Documento número 3, que recoge el registro de usuarios del servicio de convivencia familiar y social durante el año 2021 de los participantes que en su día en tres inspecciones diferentes en los tres últimos ejercicios quedó depositado en el CIRA y cuyas familias han sido derivadas por la Comunidad de Madrid concediéndoles plaza en los centros de atención diurna.

Con relación a este certificado y a la documentación que acompañan se hacen las siguientes consideraciones:

Primera: La acreditación de la solvencia técnica o profesional se realizará por el medio previsto en el artículo 90.1.a) de la LCSP: "Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Para ello el PCAP establece como criterio de selección que los licitadores deberán acreditar durante el año de mayor ejecución de los últimos tres años, un importe ejecutado equivalente al 80% del presupuesto base anual de licitación sin IVA, **es decir 244.492,80 euros**, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. Se entiende por servicios de igual o similar naturaleza la gestión de un servicio de convivencia familiar y social para, al menos, 70 familias cuidadoras de personas adultas (mayores de 18 y menores de 65 años), con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta que incluya servicios de



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1259366393116271730134**

apoyo y actividades de ocio y tiempo libre (recreativas, culturales, deportivas y análogas) en el entorno social, haciendo uso de los recursos comunitarios.

El servicio de atención diurna que puede estar dirigido a destinatarios que son objeto de este contrato es el de *“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro de día”*, ya que según su PPT: “La actividad de estos centros se entiende adecuada para prestar servicio a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, con grandes necesidades de apoyo y discapacidad intelectual de carácter profundo, severo, o moderado con trastornos graves asociados que, por sus características adaptativas y/o de salud, después de haber agotado el periodo educativo, requieren apoyos significativos.”

En cuanto a la actividad del otro servicio de atención diurna, el de *“Atención a Personas con discapacidad intelectual en centro ocupacional”*, se refiere, según establece su PPT, al servicio a personas con discapacidad intelectual (severa sin trastornos graves asociados, con discapacidad intelectual moderada con o sin trastornos asociados y discapacidad intelectual ligera con o sin trastornos asociados) que, por sus características adaptativas, después de haber agotado el periodo educativo, requieren apoyos significativos (provisional o permanentemente) para su participación social y laboral.

Una vez delimitada la solvencia técnica de los servicios prestados por la entidad que pueden considerarse que están relacionados con el objeto del contrato, es decir, los de *“Atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro de día”* y los de *“Atención a Personas con discapacidad intelectual en centro ocupacional”*, porque ambos atienden a personas con discapacidad intelectual cabe examinar si se cumplen las condiciones de **graves trastornos de conducta y la dirigida a proporcionar respiro a una cifra de 70 familias cuidadoras al año.**

Segunda: Dentro de la normativa vigente no existe la categoría de graves trastornos de conducta, por lo que a estos efectos entendemos que se refiere a las alteraciones de conducta, previstas en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

En los documentos 2 y 3 la Fundación Juan XXIII recoge las personas que tienen alteraciones de conducta:

En el Documento número 2, certificado de discapacidad de los participantes del servicio CONVIVE, se recoge una relación de 75 usuarios, de los cuales, 18 presentan, según la información aportada, alteraciones de conducta, sin especificar grado.

En el documento número 3, que según consta en el escrito de subsanación del requerimiento de fecha 23.12.2021: *“recoge el registro de usuarios del servicio de convivencia familiar y social durante el año 2021 de los participantes que en su día en tres inspecciones diferentes en los tres últimos ejercicios quedó depositado en el CIRA y cuyas familias han sido derivadas por la Comunidad de Madrid concediéndoles plaza en nuestros centros de atención diurna”*. El número de personas que se recoge en esta relación asciende a 133 personas usuarias, presentando 13 de ellas alteraciones de conducta.



Así, pues, no queda acreditado debidamente que se haya prestado servicio a una cifra estimada 70 familias de personas con dependencia reconocida, discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta, a que se refiere el objeto del contrato.

Con relación a las actas de inspección de 11.03.2020 (Documento 4) y de fecha 14.06.2021 (Documento 5) queda acreditado la atención a 110 familias y a 68 familias, respectivamente, si bien no queda acreditado que las familias atendidas sean de personas que teniendo dependencia reconocida y discapacidad intelectual cuenten con graves trastornos de conducta, a que se refiere el objeto del contrato.

Con relación a los documentos 7 (justificantes) presentados ejecutados durante el presente año 2021 para el Programa de Respiro Familiar, son los mismos documentos aportados para la Mesa de Contratación de 21.12.2021. Si bien aportaron una memoria de actividades del año 2021, en esta memoria recogen en qué consiste el servicio pero no recoge de forma individualizada las actividades realizadas. Asimismo a través de las facturas de los gastos de las actividades, de catering, de compra de material, estancia y de transporte no quedan acreditados que los gastos incurridos se hayan producido para la financiación de este programa en particular. Tampoco ha quedado acreditado que los gastos de arrendamiento, factura de luz y de personal se relacionen estrictamente con los servicios de este programa de respiro.

Contra el presente acto de trámite, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o ante los lugares establecidos en el artículo 16. 1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndolo comunicar, en este caso, al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 123 y 124 de la Ley de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Madrid, a fecha de firma.

EL PRESIDENTE DE LA MESA
Vº. Bº.

EL SECRETARIO DE LA MESA

